

María Emma Wills

Los tres nudos de la guerra colombiana: un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada y unas articulaciones perversas entre regiones y centro*

Por **Deicy Hurtado Galeano**
Grupo Estudios Políticos
Instituto de Estudios Políticos
Universidad de Antioquia

La hipótesis interpretativa central que propone María Emma Wills es que la guerra contemporánea colombiana —que va del Frente Nacional hasta 2014— ha sido:

Impulsada por actores distintos [a los de las guerras precedentes] que agencian viejos y nuevos reclamos, e innovan y a la vez reactivan repertorios de violencia reminiscentes de la confrontación armada anterior. Como en otras épocas, las tramas son confusas: las motivaciones privadas se entrecruzan con las políticas, las humillaciones personales o la codicia con los reclamos de justicia, en una guerra que sigue siendo [...] de carácter nacional y de naturaleza política (p. 763).

La estrategia argumentativa de la autora para explicar los orígenes y múltiples causas del conflicto, la obliga a un análisis de larga duración y por eso reconstruye la dinámica política del país entre mediados del siglo XIX y el comienzo del Frente Nacional, dividido en dos periodos: el primero que va hasta la Guerra de los Mil Días y el segundo que comprende las vertiginosas transformaciones sociales de la década de 1920 y va hasta la caída del general Rojas Pinilla.

Los procesos examinados en el primer segmento temporal de la guerra tienen que ver con la construcción del Estado-nación, el papel de los partidos políticos —Liberal y Conservador— y de las élites económicas, tanto en la construcción de imaginarios excluyentes de nación como en el control del poder económico y político en las regiones y localidades. De este periodo resaltan explicaciones referidas a: los partidos como “redes multiclassistas” y clientelares capaces de intercambiar tanto votos como armas; las identidades partidistas como referentes previos y más relevantes que la identidad nacional y el Estado; la configuración de “órdenes regionales particulares”, propios de un mercado interno débilmente integrado; los problemas de recaudación fiscal del Estado y la inexistencia de un ejército centralizado; los poderes regionales resistentes al control del poder central; los territorios “vacíos” que albergaron población excluida o autoexcluida, convertida en colonos y pequeños campesinos.

De manera que los nudos que este periodo dejó sin desatar son: la enemistad absoluta entre militantes de los dos partidos como base de la identidad política —el adversario político como enemigo que se excluye del juego político y se elimina mediante la guerra—; un ejército incapaz de profesionalizarse y deslindarse de los partidos; el predominio de la matriz conservadora por la influencia de la Iglesia católica en los procesos sociales y culturales; unas expectativas de titulación de predios para campesinos, truncada por las tramas locales del poder político y económico. Nudos no desatados que explicarían por qué el “juego político estaba dispuesto de tal manera

que podía fácilmente derivar en guerra” (p. 769), en una guerra como la de los Mil Días con la que inició el siglo xx colombiano.

El segundo segmento de esta reconstrucción de larga duración inicia con la emergencia de actores inesperados en la esfera pública de la década de 1920 —organizaciones obreras, partidos de izquierda, ligas campesinas—, así como de nuevas formas de expresión política —periódicos, mítines, tomas de espacios públicos e invasiones—. Involucra también las dinámicas reformistas impulsadas desde la propia Presidencia de la República —Alfonso López Pumarejo—, que intentaban poner al país a tono con la modernidad —reforma agraria, educación superior, patrimonio de las mujeres, matrimonio civil y divorcio, extensión del sufragio masculino, derechos sindicales, nacionalización de la policía—. No obstante, esta gran movilización social y los intentos progresistas institucionales del país fue contenida, perseguida o reprimida gracias a que la matriz cultural conservatizante estaba arraigada en buena parte de la población y a que tenía unos actores con gran capacidad para afianzarla: el Partido Conservador, los jefes de la Iglesia católica y sus púlpitos, una Policía que lideró la persecución política de la época y unas élites regionales y locales resistentes a perder sus privilegios y prebendas.

Este periodo escenificó una “confrontación ideológica, cada vez más virulenta” (p. 772), con unas instituciones que al estar imbuidas en dicha confrontación, no tuvieron capacidad para domeñar el antagonismo y conducirlo por sendas democráticas, pues además de reactivar la enemistad entre liberales y

De manera que los nudos que este periodo dejó sin desatar son: la enemistad absoluta entre militantes de los dos partidos como base de la identidad política —el adversario político como enemigo que se excluye del juego político y se elimina mediante la guerra—; un ejército incapaz de profesionalizarse y deslindarse de los partidos; el predominio de la matriz conservadora por la influencia de la Iglesia católica en los procesos sociales y culturales; unas expectativas de titulación de predios para campesinos, truncada por las tramas locales del poder político y económico. ”

conservadores, la naciente izquierda se convirtió en un nuevo foco a eliminar del juego político. En este periodo marcado por la:

[...] persecución política, se anudaban distintos conflictos. Por debajo de los grandes marcos nacionales que ordenaban la confrontación de enemistades absolutas entre liberales y conservadores, se movía un país en efervescencia donde se mezclaban los pequeños agravios cotidianos con la ambición de poder entre facciones así fueran del mismo partido; las discriminaciones raciales y étnicas; las transformaciones en los roles y representaciones femeninos; las sublevaciones contra las jerarquías y desprecios sociales, y el despojo “vertical” y “horizontal” de la tierra (p. 772).

El asesinato de Gaitán, el cierre del Congreso, la formación de las guerrillas liberales del Llano, entre otros, configuraron los episodios desencadenantes del nuevo ciclo de guerra: La Violencia. Los nudos abigarrados de este ciclo fueron: los odios heredados, una insubordinación social difusa sin una fuerza nacional capaz de articularla y la codicia por la tierra, los cargos y sus prebendas en el ámbito local y regional. Un periodo que se cierra con los militares en el Gobierno, un general en quien la élite política bipartidista depositaría la “pacificación” del país, pero que se desvaneció rápidamente con acciones represivas y autoritarias como: la arremetida contra los estudiantes, la ilegalización del Partido Comunista, el cierre de periódicos liberales.

Una vez reconstruidos los hilos anudados desde el siglo XIX que explican el surgimiento de la guerra colombiana, Wills se adentra en la “guerra contemporánea” a la que divide en tres periodos: a) desde inicios del Frente Nacional hasta 1976 que “fue más que una dictadura disfrazada pero menos que una democracia garantista” (p. 774); b) entre 1977 y 1982 denominado como *la transición a la guerra total* (p. 778); y c) entre 1982 y 2014 nombrado como *de expansión de la guerra y de evidentes fracturas estatales* (p. 792).

En relación con el Frente Nacional, la autora hace un esfuerzo por mostrar de manera equilibrada que este acuerdo de alternancia, aunque no era una dictadura que cancelara el régimen democrático, sí implicó un cierre del sistema político en el que: a) se generaron importantes exclusiones de partidos de izquierda —sin necesidad de ilegalizarlos ni de im-

pedir su presencia camuflada en listas al Congreso o de que sus ideas pudieran ser enarboladas por el MRL—; b) se desplegaron estrategias restrictivas de los derechos y garantías constitucionales condensadas en la figura del Estado de excepción y la justicia penal militar para juzgar civiles, que si bien pretendían contener la acción de las nacientes guerrillas, terminaron por afectar —sin cancelar tampoco— la gran efervescencia social que estaba surgiendo en los años sesenta de la mano de las mujeres, los estudiantes, los sindicalistas, los indígenas y los campesinos. En últimas, los aprendizajes heredados de la época llevaron a restringir seriamente la existencia de una esfera pública plural: protestas y demandas de participación y redistribución tratadas como asuntos de orden público; conformación de listas de sospechosos, allanamientos, torturas, consejos de guerra, detención ilegal de civiles sospechosos; militarización de la sociedad, autorizando a los civiles para armarse en defensa propia y a los militares para conformar grupos civiles armados en defensa de la seguridad.

Este periodo puso en evidencia la división interna de la élite política respecto del problema de la tierra y de la élite militar respecto del tratamiento que se le debía dar al conflicto social y a las emergentes guerrillas. Pero más allá de esta evidente división, lo que se resalta es la manera como en Colombia no solo han sido acalladas las corrientes progresistas y alternativas de izquierda, sino también las tendencias reformistas de la clase dirigente. En el debate sobre la tierra, se impusieron quienes defendían la propiedad privada —conservadores y hacendados liberales de las regiones—, sobre aquellos que la veían como fuente de equidad social —MRL y dirigencia nacional del partido liberal—, quienes enfatizaron la productividad del campo y la agroindustria sobre la pequeña propiedad de campesinos y colonos. En la cuestión del orden público, si bien la clase política estaba más alineada alrededor de las medidas restrictivas de los derechos, las fracturas se evidenciaron en el seno de las propias fuerzas armadas, pues esa ala reformista-desarrollista que veía la seguridad como un problema de inclusión en el desarrollo, terminó acallada por ese sector de oficiales más conservadores que propugnaban por medidas represivas y restrictivas de los derechos que, además, se abrogaban la seguridad nacional como una responsabilidad de su exclusiva competencia.

El segundo periodo de la guerra contemporánea, caracterizado como de transición a la guerra total

El último periodo de la “guerra contemporánea” (1982-2014) inició con intenciones reactivas al autoritarismo impuesto por el Estatuto de Seguridad, y desde el Ejecutivo se retomaron argumentos sobre la injusticia y la desigualdad como acicates del conflicto armado; postura que tuvo respaldo en el Congreso, al aprobar las conversaciones con grupos armados —FARC, M-19 y EPL— y la posterior amnistía para sus integrantes. ”

(1977-1982), se caracterizó por la exacerbación y radicalización de la movilización sindical, así como por la apelación, por parte del ejecutivo y de las Fuerzas Armadas, al Estado de sitio y al Estatuto de Seguridad con los consabidos excesos de la fuerza pública —consejos de guerra verbales, allanamientos, detenciones arbitrarias, torturas—. Según la autora, en este periodo, en contraste con el anterior, en el Congreso se oyeron voces garantistas que pusieron en cuestión el *Estado de policía*, provenientes del Frente Unido Popular, de la UNO, del Partido Liberal y hasta al Conservador —sin desconocer que hubo posiciones aprobatorias del Estatuto y de la restricción de derechos—; además de constituirse los cimientos del movimiento de defensa de los derechos humanos. No obstante, ni la movilización social ni el Congreso lograron contener la espiral autoritaria ni realizar un diseño institucional acorde con el Estado social de derecho, con asuntos tan básicos como la separación de poderes y el debido proceso; consolidándose entonces aquella idea de que la seguridad y el orden público era un campo de exclusiva competencia de los militares, quienes no tenían ningún contrapeso ni eran llamados a rendir cuentas.

El último periodo de la “guerra contemporánea” (1982-2014) inició con intenciones reactivas al autoritarismo impuesto por el Estatuto de Seguridad, y desde el Ejecutivo se retomaron argumentos sobre la injusticia y la desigualdad como acicates del conflicto armado; postura que tuvo respaldo en el Congreso, al aprobar las conversaciones con grupos armados —FARC, M-19 y EPL— y la posterior amnistía para sus integrantes. Esta vez, la fractura del Estado se haría evidente entre el proceso negociador y de inclusión de las guerrillas, adelantado por el Gobierno nacio-

nal y las fuerzas sociales y políticas regionales que se oponían a ese proceso y abogaban por legislaciones de excepción y restricción de los derechos; lo que, por supuesto, tuvo resonancia en el Ejército y condujo a la consolidación de un ala clandestina de esta institución que exacerbó el discurso de la enemistad y estableció relaciones perversas con fuerzas contraguerrilleras clandestinas —como el MAS—.

A la fractura del Estado en esa relación entre lo nacional y lo regional, se le sumó una nueva actividad: la producción de drogas ilícitas, a la que se articularon fuerzas antiguerrilleras y de la que no se libró ni la propia guerrilla. Se trató de un contexto de alta polarización en el que serían sacrificados tanto los opositores a las mafias y sus alianzas con la institucionalidad, como quienes rechazaron la articulación de la lucha guerrillera con el narcotráfico, impidiendo así que las corrientes democratizadoras tuvieran alguna capacidad de incidir en la vida política del país.

Ese poder mafioso tuvo una gran incidencia en las dinámicas del poder locales y regionales, pues una de las estrategias de blanqueamiento del dinero, fue la compra de tierra. Además, cifras presentadas por la autora muestran la relación directa entre municipios violentos y extremadamente violentos con la presencia del narcotráfico, que se explica, también, por la estrategia contraguerrillera desplegada por los narcotraficantes como expresión de venganza frente al secuestro del que estaban siendo víctimas, y a la que se articularon terratenientes, empresarios, jueces, políticos regionales, policías y militares, portadores de intereses diversos pero con un eje común: el “odio visceral contra las guerrillas” (p. 797), los comunistas y sus presuntos aliados. Fue todo esto lo

que dio lugar a la legalización de las autodefensas y grupos paramilitares, quienes en sus alianzas perversas en diferentes regiones del país se disputaron la tierra y el control territorial como vía para gobernarla. Para la autora, se pasó a una “guerra por la constitución del orden social” (p. 797) en los ámbitos local, regional y hasta nacional. Guerra que no solo llevó a la expulsión de las guerrillas de un territorio sino también a la transformación de “las geografías sociales y el poblamiento de los territorios” (p. 798).

Para la autora, si bien la recomposición del orden social en localidades y regiones fue exitoso, este modelo autoritario y despótico no logró instalarse exitosamente en la nación o en las instituciones del Estado, y fue así gracias a la oposición expresada por diversos sectores: políticos, militares y de policía, de la justicia, de periodistas, de organizaciones civiles. Por eso la autora encuentra en los rediseños institucionales del Estado los diques de contención a dicho modelo: la prohibición de organizar grupos de civiles armados, los fallos judiciales contra políticos y oficiales comprometidos con el paramilitarismo, el compromiso del Ministerio de Defensa en la inculcación de una cultura de los derechos humanos y del DIH, las corrientes políticas con voz y voto en instancias como el Congreso de la República.

Con lo expuesto hasta aquí, la contribución principal que hace la profesora Wills es que el conflicto colombiano se explica por la sempiterna e inequitativa redistribución de la tierra, por la sistemática aniquilación de formas de representación política de inmensos sectores sociales subalternos, así como por las fracturas internas de la institucionalidad estatal que han impedido la modernización del Estado en el sentido de garante de derechos, responsable de la construcción del sentido de lo público y de una esfera pública plural y democrática. Pero, desde mi

punto de vista, lo más relevante de su ensayo es ese enfático llamado de atención a poner la mirada en las regiones y localidades, así como en los marcos interpretativos. Es examinando esos territorios como tal vez se puedan desanudar aquellos hilos enmarañados que han dejado en la configuración del orden político colombiano los órdenes locales despóticos y arbitrarios de paramilitares y guerrillas —con sus respectivas redes de apoyo—, toda vez que: “por debajo de una normatividad democrática y elecciones regulares, se afianzan redes perversas que vinculan a distintos sectores y autoridades regionales a proyectos y dominios despóticos” (p. 801).

Para Wills, se trata de poderes que se mueven en la legalidad, usan los patrones clientelistas, participan en elecciones democráticas y hasta se constituyen en autoridades legítimas. Redes perversas de poder que se han anudado muy bien con la pervivencia de unos marcos interpretativos polarizantes y de la enemistad absoluta —de las élites y de los grupos contestatarios, de la izquierda y de la derecha—, que a lo largo de la historia política colombiana han impedido la consolidación de corrientes progresistas o reformistas en la institucionalidad —fuerzas militares y de policía, Congreso, organismos de control—, en la sociedad civil y en la propia izquierda.

Marcos interpretativos que, utilizados por esas redes despóticas de poder locales, han configurado la urdimbre para “atizar la guerra” y dejar a su paso más de 220 mil víctimas con pérdidas y daños incommensurables en las víctimas directas y en la sociedad; pues esos poderes autoritarios han impedido que se construya una institucionalidad democrática y unos marcos interpretativos y culturales democráticos, que impidan que la eliminación física del adversario sea una opción válida para tratar los conflictos y las diferencias.

* Véase Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (2015, pp. 762-806). La paginación corresponde al buscador de páginas del documento en PDF, alojado en el sitio web de la Mesa de Conversaciones.

Referencias bibliográficas

Wills, María Emma. (2015). Los tres nudos de la guerra colombiana: un campesinado sin representación política, una polarización social en el marco de una institucionalidad fracturada

y unas articulaciones perversas entre regiones y centro. En: Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas. Contribución al entendimiento del conflicto armado en Colombia (pp. 762-806). Mesa de Conversaciones.

Recuperado de <https://www.mesadeconversaciones.com.co/comunicados/informe-comisio%CC%81nhisto%CC%81rica-del-conflicto-y-sus-vi%CC%81ctimas-la-habana-febrero-de-2015>